Los últimos de la fila: la reivindicación de la democracia en escenarios de posacuerdo

NESTOR ALFONSO ROSANÍA

Introducción

El enfrentamiento armado en Colombia es uno de los temas de mayor relevancia dentro del desarrollo de políticas sociales y económicas para el país. El impacto social, cultural, financiero y educativo de este fenómeno ha marcado un sinnúmero de generaciones que se han visto afectadas de forma directa o indirecta por esta situación. Sin embargo, Colombia se encuentra *ad portas* de dar por finalizado un conflicto armado de décadas, lo que supondrá una suma de cambios en todo el panorama nacional y, por supuesto, una transformación del enfoque político y democrático de la nación.

A raíz de lo anterior el debate se ha llenado de expectativas y dentro de los cambios de mayor relevancia que se esperan para el posconflicto se destaca la modificación del panorama nacional en un escenario donde se otorguen cargos de elección política para líderes guerrilleros, enfatizando aún más en el sistema democrático de la nación colombiana. Indudablemente, esto traerá consigo implicaciones en ámbito social y de opinión pública trascendentales para el desarrollo del país, cuyos efectos se verán reflejados en el contexto internacional. Con la importancia del fin del conflicto armado en el territorio colombiano y

las repercusiones políticas que tal acontecimiento podría conllevar, se hace necesario plantear el siguiente interrogante: *¿cuál es el impacto de lo acordado en La Habana, respecto a participación política, en la consolidación de la democracia colombiana?*

Tal cuestionamiento direccionará el presente trabajo investigativo, que será abordado mediante un compendio de información que engloba artículos de opinión, fuentes bibliográficas, documentos informativos, entre otros, a partir de los cuales se tratará el impacto de la firma del acuerdo y el subsecuente fin del conflicto, en la democracia colombiana.

Para dicho efecto, en primera instancia, se planteará la temática desde una perspectiva general, iniciando con una caracterización de la democracia en Colombia (pensada en términos de participación política) en la que se podrá observar cómo las dinámicas del régimen pluralista colombiano se han visto atravesadas por las lógicas del conflicto armado; en segunda instancia, se describirá cuál ha sido la articulación de la participación política de las FARC a lo largo de la historia, lo que evidencia la degradación del uso de mecanismos legales y democráticos en la utilización de estrategias de lucha armada; en tercer lugar, se determinará qué ha permitido que la lógica de participación política de las FARC por medio de la vía armada, se constituya como un fenómeno de largo aliento que obstaculiza la consolidación de la democracia; y por último, se observará cómo la incorporación de las FARC a la vida política legal contribuirá a la estructuración de un régimen democrático más fuerte.

La democracia en Colombia

A lo largo de los años, la historia política colombiana se ha encargado de posicionar el concepto de democracia como un elemento de central relevancia para el desarrollo del país. Es indudable que el actuar político de la nación (a partir de los procesos gestados en la independencia y rectificados por las dinámicas de la Guerra Fría) ha estado direccionado por una suma de criterios que pretenden preservar los valores propios de los regímenes pluralistas, protegiendo la garantía y la promoción de los principios de igualdad, participación e inclusión.

Lamentablemente, pese a que el prontuario político colombiano se ha caracterizado por la perseverancia en relación con el logro del ideal democrático, no se puede ignorar el hecho de que “guerra y política, orden y violencia, violencia y democracia, constituyen un conjunto de oposiciones que no solo han permanecido por periodos prácticamente ininterrumpidos en la historia nacional, sino que constituyen una de las bases del sistema político colombiano” (Peña Contreras, 2007, p. 192).

Pese a que en comparación con otros Estados latinoamericanos el país ha presentado casi un siglo completo de continuidad democrática (esto desde una perspectiva formal), la democracia va a ser entendida en estricto sentido como, un

[...] régimen político en el que el pueblo participa tanto en la organización como en el ejercicio del poder político y en el que los derechos y libertades de los ciudadanos son reconocidos y protegidos ... porque existe un diálogo permanente entre gobernantes y gobernados. (Monroy Cabra, 2011, p. 6)

Este concepto ha presentado obstáculos y falencias históricos —materializados en gran medida por las lógicas del conflicto armado—, derivando en el hecho de que en Colombia se haya producido un régimen cuya edificación se encuentra inconclusa.

Por lo tanto, se hace tácita la necesidad de evaluar el régimen democrático colombiano, pero más allá de ello, se plantea el imperativo de analizar y describir cómo el conflicto armado ha obstaculizado la consolidación de la democracia en el país. Por ello, bajo este panorama resulta útil realizar el análisis de la democracia a la luz del estudio de, por lo menos, cuatro condiciones primordiales propuestas por autores como Merino Merchán, Pérez-Ugena y Vera (1995, p. 55, citados en Monroy Cabra, 2016, p. 6) que permiten determinar, en cierta medida, si un régimen democrático —pensado en términos de participación política—¹ puede ser considerado como tal. Es de suma importancia establecer que, si bien los siguientes criterios son útiles para el propósito

1 Aquí entendida como la posibilidad que tienen los ciudadanos de incidir en el curso de los acontecimientos políticos.

del texto, no son únicos y mucho menos exclusivos.² Así pues, las condiciones propuestas, teniendo en cuenta la intensión del presente capítulo, son: a) la existencia de soberanía popular, b) participación directa o indirecta, c) el pluralismo político e ideológico, y por último, d) el principio mayoritario para la toma de decisiones.

Antes de abordar las condiciones propuestas para la evaluación de la democracia, se debe tener en consideración que la Constitución de 1991 resulta fundamental para entender la transversalidad de las lógicas del conflicto armado como barrera en la consolidación de la democracia, pues esta constitución “es el resultado de un pacto político que intentó ser incluyente para generar la paz e impulsar una competencia pluripartidista a partir de fórmulas de ingeniería institucional” (Roll, 2002, pp. 114-115), y adicionalmente fue, como lo determina David Roll (2002), la primera norma de su nivel en referirse específicamente a la libertad de creación de partidos políticos con relativa facilidad, tratando de subsanar “la cerrazón de los dos partidos tradicionales y la exclusión sistemática de terceras fuerzas” (Roll, 2002, p. 117) que originó en gran proporción el movimiento armado.

Ahora bien, una vez aclarado este punto, la Constitución de 1991, como marco que determina de modo inicial las estructuras de participación democrática en el país establece con respecto a las condiciones anteriormente descritas que: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece” (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 3). Por otra parte, la participación de todos en las decisiones que

2 A este respecto es importante señalar que estos no son los únicos criterios establecidos por los autores para la medición de la democracia. En el listado oficial se incluyen condiciones que si bien se encuentran formalmente contempladas en el ordenamiento interno colombiano (Principio mayoritario para la toma de decisiones (art. 258 par. 1º) Respeto de las minorías (art. 108) Principio de reversibilidad del acto democrático (art. 40 inciso 4, art. 104) División de Poderes (art .113) Primacía del derecho (art. 4) no constituyen criterios esenciales para el propósito del capítulo.

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación es facilitada por el Estado (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 2) y todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 40). Todas las personas “gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación alguna por sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 13) y en este mismo sentido “se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse” (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 107). Por último, en múltiples artículos de la constitución política se establecen que el soberano elige a sus gobernantes por medio de fórmulas mayoritaria, y una vez electos la toma de decisiones es realizada mediante un consenso de mayorías representativas (para ejemplificar: Constitución Política de Colombia, 1991, art. 310, 375, 376).

Así pues, aunque de lo anterior se establece que las condiciones propuestas por los autores mencionados tienen un cumplimiento formal en el ordenamiento interno colombiano, la contemplación de dichos criterios en la carta política, aunque necesaria, no garantiza un cumplimiento real de las condiciones planteadas, ya que como se ha podido establecer a lo largo del texto, el conflicto armado ha modificado las lógicas de diferentes esferas de la vida política y democrática del país, incluyendo ideales formalizados que lamentablemente se han sostenido como aspiraciones democráticas no obtenidas.

Por lo tanto, se constituyen como violaciones o contrariedades a los criterios anteriormente mencionados el hecho de que:

- Teniendo en cuenta que el artículo 3° de la Constitución política establece que el poder público emana del pueblo, entendiendo esto como el hecho de que es el soberano quien elige y propone sus líderes, el conflicto armado ha supuesto la existencia de una tercera fuerza que ostenta el poder (pensado en términos coercitivos), pero que no ha surgido directamente de una elección democrática y generalizada.

- La participación política propuesta por la Constitución supone una intervención sostenida en un marco de legalidad que implica la utilización de mecanismos democráticos y, por lo tanto, la conformación, el ejercicio y el control del poder político mediante la vía armada constituye un serio obstáculo para consolidación del régimen democrático contemplado como tal.
- Pese a que la Constitución política del 91 da cabida al desarrollo del pluralismo político e ideológico y, en efecto, en el sistema político colombiano coexisten diferentes tendencias ideológicas, el sistema de partidos no ha logrado integrar con éxito conglomerados que logren representar el ideario expuesto por grupos al margen de la ley como las FARC.
- La participación política de las FARC no se da dentro de un marco de legalidad, pues pese a encarnar los intereses de un sector de la sociedad, la utilización de medios no democráticos que atentan contra la institucionalidad política (esta última, en efecto, emanada del soberano) contrarían las disposiciones contempladas en la Constitución de 1991.

En consecuencia, resulta de suma relevancia entender —como se tratará en los siguientes capítulos— de qué manera se ha articulado la participación política de las FARC, su evolución histórica como grupo armado al margen de la ley, y adicionalmente cuáles han sido las lógicas que han permitido su supervivencia en el marco de un régimen democrático.

Surgimiento y participación política armada de las FARC

El origen de las FARC-EP puede ser rastreado hasta mediados de la década de los veinte con la creación del Partido Socialista Revolucionario. Sin embargo, no se puede dejar de lado el hecho de que este partido se creó en medio de un contexto global mayor. En 1917, estalló la Revolución Rusa en medio de la Primera Guerra Mundial como respuesta a las precarias condiciones en las cuales se encontraba sometida

la sociedad. A partir del triunfo de la revolución, los Bolcheviques, inspirados por la reivindicación de la lucha obrera y siguiendo los preceptos comunistas, motivaron un proceso de replicación del movimiento revolucionario a lo largo del mundo (Hookham, 1967).

La gran revolución de octubre, en cabeza de Lenin, logró que campesinos, obreros y soldados armados se tomaran el poder e instauraran un gobierno comunista siguiendo los principios enunciados por Marx en su obra. Sin embargo, pese a que la revolución en Rusia logró su objetivo y se tomó el poder, esta no se replicó en todos los países como había sido previsto por el movimiento Bolchevique, aunque sí logró crear movimientos similares en algunas regiones del planeta, como lo fueron el Movimiento del 26 de Julio en Cuba, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, en El Salvador, o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estos movimientos, si bien contaron en sus inicios con menos poder que la revolución bolchevique, no mostraron menor grado de adoctrinamiento (Angell, 1997, p. 76).

En 1922, Rusia pasó a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuyo poder y alcance le permitió 20 años más tarde ser la segunda súper potencia mundial y embarcarse en una Guerra Fría en la que se enfrentó en gran medida por la defensa y propagación del régimen comunista con todo el bagaje de lucha reivindicatoria que este implicaba. Es durante este periodo en el que se materializó el objetivo de replicar las revoluciones en distintos países, ya que, en este punto, la Unión Soviética contaba con la capacidad de enviar apoyo militar, económico y formativo, y por lo tanto, resultaba viable apoyar a grupos insurgentes, obedeciendo los principios de la doctrina marxista-leninista, en el que se establecía el uso de “todas las formas de lucha” como método legítimo de obtención del poder (Lenin, 1906).

Teniendo esto en mente, el panorama colombiano de principios de siglo XX debe ser visto desde dos perspectivas. La primera, observando la coyuntura prioritaria para los gobiernos de turno quienes se concentraban en enfrentar la tensión bipartidista en el país; y la segunda, todo aquello que pasaba en un segundo plano como la creación de terceras fuerzas (como el Partido Comunista y su brazo armado). La coyuntura prioritaria, entonces, hace referencia a las situaciones principales que se estaban llevando a cabo en el país y en las que estaba

involucrado de manera directa el Gobierno; esto es, los roces entre liberales y conservadores por el poder, que eventualmente en 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (candidato a la presidencia por el Partido Liberal) dio inicio al periodo de La Violencia en el que se forman las guerrillas liberales que se enfrentan contra el gobierno conservador, especialmente en las zonas rurales, cobrando un gran número de vidas. Esta puja por el poder bipartidista se da debido a las importantes divisiones que había dentro de cada partido, pero más aún por la incapacidad de estos de tolerarse y llevar a cabo un gobierno eficiente de manera conjunta (Bailey, 1967).

Este conflicto bipartidista de la época de La Violencia es considerado una guerra civil no declarada que concluyó con un gran número de víctimas y que tuvo por resultado la toma del poder de forma impositiva en 1953 por el general Gustavo Rojas Pinilla. Durante su gobierno ofreció el fin al conflicto en el que se daría amnistía a todas las guerrillas que entregaran sus armas. Sin embargo, no todas las guerrillas y frentes armados se acogieron a las garantías de Rojas Pinilla y el conflicto bipartidista no tuvo su fin, sino hasta que ambos partidos llegaron a un acuerdo que llamaron el *Frente Nacional*.

El Frente Nacional nació como esfuerzo por parte de conservadores y liberales por ponerle un fin a la época de La Violencia, de forma tal que se hicieron una repartición del poder, en la que la participación política estaría limitada a estos dos partidos, los cuales se alternaron los gobiernos cada periodo presidencial. Esto representó el fin del conflicto bipartidista, pero limitó la participación política de otros actores completamente. Además, este sistema de alternación política evitó que se construyeran políticas de Estado a largo plazo e imposibilitó un desarrollo sostenido y consecuente en el país. Este acuerdo resultó un atentado contra las lógicas democráticas del país, ya que se limitó la participación política en igualdad de condiciones para todos aquellos que no hicieran parte de alguno de los dos partidos regentes.

Teniendo en cuenta entonces el contexto histórico enunciado, se desarrolló el inicio de las FARC-EP. Todo comenzó con el Partido Socialista Revolucionario de 1926 el cual se transformó formalmente en el Partido Comunista Colombiano (PCC) en 1930. Su objetivo principal era tomarse el poder mediante una revolución político militar,

inspirados por los diferentes movimientos comunistas alrededor del mundo y, en especial, de la Revolución Bolchevique de 1917. El primer acercamiento a su revolución en Colombia inició bajo la premisa de la “toma revolucionaria de la tierra”; de allí que los principales miembros del partido fuesen trabajadores agrícolas comunistas quienes ocupaban latifundios y formaban un sistema de autodefensa para la protección y defensa de estos (García, 2009).

El PCC en sus primeros años se basó en tres frentes de lucha reivindicatoria: la defensa armada ante un ataque, la solidaridad y la búsqueda de una solución legal. Estos tres principios llevaron a la consolidación de una voluntad política expresada por medio de acciones ilícitas como forma de llamar a una conciliación por vías legítimas con quienes detentaban el poder. El problema con esta situación fue que, como se evidenció anteriormente, la prioridad estatal en Colombia para la época estaba centrada en el conflicto bipartidista que se estaba gestando y que impedía que el Gobierno pusiera sus ojos en otros asuntos, los cuales, aunque igual de importantes, no respondían a sus intereses primordiales. De allí que las instancias de diálogo y negociación entre el partido comunista y el gobierno fueran bastante limitadas y con un grado de importancia menor.

El PCC continuó con su participación política y lanzó un candidato presidencial para las elecciones de 1938, que fueron ganadas por el Partido Liberal. No obstante, el otro frente de lucha, la armada, estaba resultando en la consolidación de unos primeros núcleos guerrilleros a raíz de la resistencia armada que había consolidado la autodefensa campesina en el campo. Estos núcleos, poco a poco, fueron alimentándose de los movimientos agrarios que iban sustentando su razón de lucha hasta lograr acoplar su intención de lucha con su estructura armada (García, 2009).

Diez años más tarde, cuando comenzó la época de La Violencia y comenzaron a surgir las guerrillas liberales a lo largo del territorio, quienes se enfrentaban contra el Ejército, principalmente, el PCC declaró una estrategia de *autodefensa de las masas* como forma de protección a sus zonas de influencia dentro del país, es decir, todos aquellos sectores donde hubiese una tradición de lucha agraria y se siguieran las lecciones del movimiento obrero europeo. Este periodo se caracterizó,

entonces, por la existencia de diversos grupos armados al margen de la ley y en forma de guerrillas que libraron luchas independientes pero se traslapaban en el mismo espacio y tiempo.

Fue 1953 cuando Rojas Pinilla ofreció amnistía a los grupos guerrilleros, que disminuyó la cantidad de actores armados (Bailey, 1967). Sin embargo, las guerrillas comunistas decidieron no acogerse a este trato, pues durante el conflicto habían tenido un crecimiento importante que les además captar y someter a guerrillas liberales. En este punto, la lucha por la vía armada estaba dando mayores resultados que la lucha política, pues no solo estaban consolidando un poder militar mayor, sino también su presencia en ciertas comunidades, sumada al discurso de reivindicación agraria, resultaba en un apoyo del pueblo que por medios políticos no adquirirían. Esto último se evidenció en 1955 en Villarrica cuando el Ejército realizó una operación para atacar a las guerrillas comunistas, pero los campesinos salieron a defender a los combatientes anteponiéndose a ellos y evitando que fueran atacados por el Ejército (García, 2009).

De esta forma, la consolidación de las FARC-EP se dio en un momento en el cual la lucha armada mostraba ser más eficiente en el proceso de obtención del poder, pues mediante esta habían adquirido territorio, legitimidad y mayor fuerza. Luego de Villarrica, Manuel Marulanda alias Tirofijo, y Ciro Trujillo comenzaron la planeación de su proyecto expansionista, motivados por igual por el triunfo de la revolución cubana en 1959 y la aparición de caudillos comunistas, como Fidel Castro y el Che Guevara. Este plan expansionista nutrido económica, militar y doctrinalmente desde el extranjero, hizo uso de la invasión de tierras, sumada al movimiento agrario y un sistema de autodefensas para crear lo que llamaron las áreas base. Estos fueron territorios de autocontrol donde no había presencia del Estado y estaban completamente controladas por las agrupaciones de autodefensa campesina.

Estas áreas base se transformaron en las llamadas *repúblicas independientes*, donde ya se tenía una estructura propia de ordenamiento político social y militar, sin que el Estado tuviera presencia o injerencia; por esto mismo se adelantó la *Operación Marquetalia*; en 1964, las Fuerzas Armadas entraron al territorio ocupado de Marquetalia para recuperarlo y darle un golpe contundente a las fuerzas insurrectas.

La ofensiva fue determinante y sorpresiva, sin embargo, los dirigentes principales lograron huir de la cercada del Ejército hacia otro territorio donde se reorganizaron y meses más tarde organizaron la primera Conferencia Guerrillera de 1965, en la que se unieron las distintas guerrillas y fuerzas insurgentes para luego, en 1966, conformarse durante la segunda Conferencia Guerrillera en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (García, 2009).

A partir del recorrido histórico previo, se hace evidente la transformación que vivió las FARC desde sus inicios dentro del Partido Comunista, siguiendo las tendencias de la lucha obrera que se daba en distintas partes del mundo e inspirados en las revoluciones internacionales, para encontrarse con una realidad colombiana distinta, inestable políticamente, pero sobre todo excluyente políticamente. Dentro del análisis es importante resaltar el concepto de *combinación de todas las formas de lucha* pues es este no solo permitió la creación del brazo armado de un partido comunista, sino que fue la forma de encontrar la participación política que buscaban desde el comienzo del partido.

En su texto, *La guerra de guerrillas* publicada en la quinta edición de *Proletario*, Lenin habló sobre el principio marxista de las distintas formas de lucha “El marxismo admite las formas más diversas de lucha; además, no las ‘inventa’, sino que generaliza, organiza y hace conscientes las formas de lucha de las clases revolucionarias que aparecen por sí mismas en el curso del movimiento” (Lenin, 1906, p. 21).

De ahí que se desarrollara y se avalara en la doctrina la lucha desde diferentes frentes, como lo estableció desde un principio el PCC al ser un partido de corte marxista-leninista. De igual forma, readaptó sus formas de lucha a lo largo de su recorrido histórico y así reafirmó su accionar —como lo afirmaba Lenin—, pues en el curso del movimiento fueron cambiando sus frentes y reafirmandolos.

La participación política en Colombia, como fuente de democracia, se vivió de forma muy limitada durante los primeros años de conformación del PCC y posteriormente las FARC. Esta limitación democrática, unida al principio de las diferentes formas de lucha, permitieron que se construyera un intento de participación política desde el alza en armas como medio de llegar eventualmente al poder. Fue así como en el IX Congreso del PCC de 1961, se estableció el principio

de “Combinación de todas las formas de lucha” (González Arana y Trejos, 2013). Colombia se enfrentaba a la gobernabilidad del Frente Nacional, la cual, por su naturaleza bipartidista, evitaba que hubiese participación política de cualquier otro partido, de allí que se estableciera el principio de combinación como lineamiento guía al cual se adhirieron las guerrillas comunistas y las autodefensas campesinas, para, de esta forma, fortalecerse y lograr la obtención de poder que por medios tradicionales no lograron, resultando en el punto máximo hasta su momento en el establecimiento de las *repúblicas independientes*.

Sostenimiento de las Farc

El objetivo del presente capítulo es identificar las estrategias de financiación ligadas a la realización de actividades ilícitas, que les permitieron a las Farc sostenerse económicamente para continuar con una lógica de participación por vía armada, la cual se vio diluida debido al proceso de obtención de mayores ingresos y un mayor poderío intrínseco a la acumulación de recursos, tierras e influencia. De esta forma se buscó estudiar la importancia de un medio de financiamiento para la guerra insurgente de guerrillas y generar una descripción de diferentes estrategias de financiamiento de las Farc, y finalmente su relación con el objetivo de lograr una participación política por medio de la lucha armada.

La confrontación armada entre las Farc y el Gobierno nacional en lo que prosiguió a la creación formal del grupo guerrillero fue una confrontación de carácter no-convencional, es decir, una guerra asimétrica tradicional dentro del contexto mundial de la Guerra Fría. Esto permitió que ambas partes (Gobierno y Farc) se vieran incluidas dentro de las dinámicas bipolares de comunismo y el capitalismo y que, de esta forma, *la revolución*, adelantada por las Farc, recibiera apoyo internacional de países de izquierda como Cuba y la gran potencia comunista del mundo, la Unión Soviética.

El apoyo brindado en los primeros años de consolidación de las Farc fue más que fundamental para la lucha de esta guerrilla, ya que para que pudiesen sostener su participación política por vía armada, se

necesitaban recursos que permitieran perpetuar su organización y, de esta forma continuar, la lucha y desde sus principios, ser escuchados.

La importancia de la financiación para la guerra se ha visto a lo largo de la historia, en la cual, los Estados con más recursos son los que tienen mayores capacidades materiales de defensa. De igual forma, sucede para los grupos armados que funcionan de manera insurgente. Como la guerra o el enfrentamiento en sí mismo no les merecen ganancias; normalmente, deben recurrir a formas de ingreso por medio de patrocinios o en ausencia de estos, a medios ilegales para poder sostener sus gastos. Para entender el proceso de financiamiento como forma de autosostenimiento de la lucha armada y con esta, la participación política de las Farc, se verá el patrocinio de agentes externos, el narcotráfico y el contrabando como fuentes de financiación.

Durante la Guerra Fría el sistema de patrocinios funcionó bien tanto para la Unión Soviética como para los movimientos a los que apoyaba, ya que la Unión Soviética en su confrontación indirecta con Estados Unidos, buscaba ganar un mayor número de aliados y estados que compartieran los ideales comunistas que los regían; y los movimientos revolucionarios obtenían recursos para sostener su lucha armada. De ahí entonces que la Unión Soviética les prestara a los grupos insurgentes apoyo táctico, económico e instructivo para así ayudarlos a la consecución del poder en sus respectivos países.

Este sistema se vio traducido en Latinoamérica de forma exitosa con la primera guerrilla y movimiento social de corte comunista que logró llegar al poder. Este fue el movimiento liderado por Fidel Castro en Cuba, el cual logró derrocar a la dictadura de Batista y así hacerse al poder estableciendo un régimen socialista comunista. El recién instaurado gobierno cubano decidió apoyar y patrocinar a las guerrillas de izquierda latinoamericanas, las cuales, como ellos, buscasen tomar el poder y establecer un régimen de corte socialista comunista. Cuba resultó enviando apoyo a grupos insurgentes en Colombia, Perú, Bolivia, etc. Este apoyo resultó indispensable para los grupos comunistas que necesitaban un respaldo institucional con fuerza estatal para fortalecerse en sus luchas.

Este apoyo puede ser visto en el caso de Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la única guerrilla de América Latina que durante la Guerra Fría logró hacerse al poder además de Cuba. Cuando el movimiento nicaragüense revolucionario se preparaba para tomar el poder, recibió apoyo no solo de La Habana, sino también de la guerrilla palestina Fatah (Wickham-Crowley, 1987). Esta consecución de recursos le permitió asegurar el sostenimiento de la ofensiva por 5 años hasta que finalmente resultó en la toma del poder en 1979.

Otro ejemplo del apoyo internacional a las luchas de guerrillas latinoamericanas se ve en los recursos monetarios que recibió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México por parte de grupos europeos que apoyan su causa de lucha. Uno de estos es el País Vasco, el cual, de acuerdo con los informes incautados en 2003 por parte del diario mexicano *Reforma*, envió una importante suma de dinero con el fin de garantizar la permanencia de la lucha zapatista en México. Si bien esta colaboración no es directamente entre Estado y grupo insurgente, ya que está la sospecha que el apoyo está dado por el vínculo entre el grupo ETA y el EZLN, demuestra que la aportación de capitales desde miembros externos a las guerrillas ha sido una forma de garantizar el financiamiento y la continuación de estas (*El Imparcial*, 2010).

Refiriéndose entonces al caso de las Farc en Colombia en términos de su forma de financiamiento como sistema para continuar con su lucha y, por lo tanto, participación por vía armada, se distingue en sí mismo, distintos periodos dentro de la consolidación de las Farc como una guerrilla unificada y su fortalecimiento por medio de actividades económicas ilegales.

Luego de la conformación de las Farc en la Segunda Conferencia Guerrillera de 1966, y hasta 1982 con la Séptima Conferencia Guerrillera, el grupo insurgente se propuso un proceso de fortalecimiento y crecimiento en términos de capacidades materiales para el enfrentamiento. Esto quiere decir, el reclutamiento de más combatientes, la apertura de nuevos frentes, expandiendo así su influencia territorial y una mejora de la preparación de las fuerzas combatientes (García, 2009). Sin embargo, en la Séptima Conferencia Guerrillera de 1982, las Farc buscaron fortalecer su estructura de lucha y reformar las tácticas y estrategias que hasta el momento no habían resultado fructíferas. Por ello,

durante esta conferencia se plantearon cinco objetivos: crecimiento político, crecimiento organizacional, acciones ofensivas militares, crecimiento económico y acciones publicitarias para la organización (García, 2009). En ese momento también se adoptó la concepción de las Farc como Ejército del Pueblo, pues en primera instancia busca reorganizar su estructura combatiente a una más formal con forma de ejército y en segundo lugar plantea reivindicar su lucha popular como eje de direccionamiento central.

Fue así como el objetivo del crecimiento económico de las Farc buscó ser alcanzado en medio de un momento histórico en el que comenzó el auge de la producción y el tráfico de estupefacientes. Con el proyecto expansionista que había adelantado el grupo en los últimos años, adquirieron acceso y control sobre territorios donde el cultivo de coca se dio fructíferamente y les permitía a ellos recibir ingresos que les aseguraba un mayor poderío militar y de esta forma político (García, 2009).

Teniendo en cuenta esto es que el narcotráfico resultó ser una opción muy atractiva para las Farc para adoptar una estrategia de auto sostenimiento fructífera. De acuerdo con las Farc en cuanto al tema del narcotráfico, el grupo no estuvo involucrado directamente en el proceso de producción o de tráfico de los insumos o de los estupefacientes sino que se encargó de cobrar un impuesto a todas las actividades económicas que se llevaran a cabo dentro de su territorio contralado (McDermott, 2013).

Lo cierto es que respecto de las finanzas de las guerrillas, existen dos trayectorias claramente diferenciadas. Inicialmente, las FARC rechazaban cualquier relación con la marihuana o la coca, por entender que desvirtuaban a las comunidades receptoras y se contravenía a lo que debía ser el “espíritu guerrillero”. No obstante, terminan por aceptar lo que se llama el “impuesto de gramaje”, una vez que tiene lugar la VIII Conferencia Guerrillera de 1989. (Sierra, 2016)

Sin embargo, se ha encontrado que de hecho sí hubo involucración directa de algunos frentes de las Farc dentro de diferentes momentos de la cadena de producción bien sea manejando o subcontratando

laboratorios en sus territorios para la cristalización de cocaína. De igual forma se ha visto injerencia directa de las Farc con el narcotráfico en sí, pues usan sus rutas y territorios controlados para transportar coca, pasta de coca y cocaína a través del país e incluso hasta los países fronterizos con Colombia (McDermott, 2013).

Por esto, ante la observación de la comunidad internacional y las organizaciones como la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, si bien no incluyen a las FARC-EP como grupo narcotraficante como tal, puesto que no tienen la estructura de los carteles mexicanos o colombianos, sí resaltan los vínculos de estos con los grandes carteles mexicanos, especialmente teniendo actividad de tráfico de droga en el caribe y hacia la costa este de Estados Unidos (DEA, 2015, p. 5).

Del mismo modo, el contrabando resulta dentro del esquema de financiación de las FARC-EP como un elemento secundario, pero importante para el sostenimiento económico de la organización guerrillera. Las rutas y el conocimiento ya desarrollado en temas de transporte ilegal de estupefacientes, les permite transpolar esa experiencia y aplicarla en el tráfico ilegal de mercancías. Dentro de los bienes que las FARC-EP encuentran más provecho contrabandeando está la gasolina. Esto se da mediante el robo de combustibles a los oleoductos que pasan por las zonas controladas por ellos. Se calcula que el robo de gasolina diario es de 305.000 galones y a este número se le debe sumar el otro tanto que es robado y contrabandeado desde Venezuela (Caicedo, 2014).

Este mecanismo de financiación de las FARC-EP implica que no solo es el transporte de un bien sino que en la mayoría de los casos, estos son obtenidos de manera ilegal como minería ilícita, robos a oleoductos y alianzas con bandas criminales quienes realizan la actividad extractora ilícita desde un principio. Este tipo de mecanismos y las ansias de las FARC-EP por conseguir más medios de auto sostenimiento logran que los objetivos y las acciones del grupo giren en torno a su sostenimiento económico y la continuidad de su poderío en los negocios ilícitos de forma nacional y transnacional. El gran problema de esto es la pérdida de los valores y los principios fundacionales por los cuales buscaban una participación política dentro de Colombia y

que siguiendo los preceptos de “La combinación de todas las formas de lucha” fueron diluyéndose con el transcurso del tiempo.

Entonces, se puede concluir que las actividades de narcotráfico y contrabando resultan para las FARC-EP un negocio que le provee anualmente recursos económicos lo suficientemente amplios como para fortalecer y engrandecer su lucha armada mediante el reclutamiento de un mayor número de combatientes, la adquisición de mejores armas y una mayor influencia en las regiones y las poblaciones en las que tenía presencia. El gran problema del gran poderío que traía consigo el narcotráfico para las FARC-EP es que como temían en los principios de su establecimiento, resultaría desviando la razón original de lucha armada, que era establecer por medio de las armas una participación política dentro de las dinámicas colombianas.

Proceso de paz y participación política

El escenario del posconflicto en Colombia está suscitando aún más debates que la misma búsqueda de la solución. Las opiniones son muy diversas y giran en torno a la favorabilidad del desarrollo del tratado en la búsqueda para la paz (Konrad Adenauer Stiftung, 2013). Además de los efectos sociales y económicos que la firma de la paz traería consigo, son las implicaciones políticas las que están elevando el debate a una posición de discrepancia y nulidad. Y es que el eje central de la discusión abarca más puntos que el simple cese al fuego por parte de los actores armados ilegales en el territorio nacional. Sin embargo, existen muchos más puntos para analizar en el panorama político que involucran —como se estableció con anterioridad— lo que la paz supondría para la democracia colombiana.

En relación con lo anteriormente señalado, a lo largo del segundo capítulo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se trata el tema de la participación política. Su finalidad es instituir una apertura democrática para construir la paz, para de esta manera, buscar el fortalecimiento de los colombianos en los asuntos públicos y políticos. Con el fin de consolidar la paz se pueden destacar los siguientes puntos del presente capítulo del Acuerdo: la creación de nuevos partidos políticos, el fortalecimiento

para la transparencia en los procesos electorales, la creación de circunscripciones transitorias especiales de paz para la inclusión y la representación política, la participación de partidos y movimientos políticos de oposición, la promoción de la participación de las comunidades en los procesos de planeación territorial y regional, el control para la transparencia de la gestión pública, y la garantía que no serán objeto de violencia aquellos que transitaron a la política y dejaron de utilizar sus armas.

El desarrollo del acuerdo de paz, busca la participación de un nuevo ente político con un sustento legal dentro de un estatuto y unas garantías que le permiten mantenerse dentro del sistema de partidos de Colombia. Este sistema durante el siglo XX estuvo consolidado por los dos partidos tradicionales, Liberal y Conservador, pero desde finales de la década de los ochenta con el desmonte del Frente Nacional, comenzó a ser maleable y evidencia cambios institucionales. Las falacias que tenga el sistema de partidos pueden ser varias, dentro de estas Bleier y Arévalo (2004) identifican que los partidos sobreponen las funciones electorales, por lo que no hay gobernabilidad e implementación de políticas públicas; en este sentido, sugieren trabajar en tres direcciones: primero, “apoyar el trabajo de los elegidos en sus respectivas corporaciones” (p. 67); segundo, permitir la competencia entre tecnócratas y *lobbyistas*; y tercero, fomentar centros de estudios dentro de los partidos para el diseño y formulación de políticas.

Si bien esto es un esbozo general, que también se ha dado dentro del acuerdo, cabe destacar que la *competencia* es una variable positiva para el escenario de la firma del acuerdo del Gobierno con las FARC-EP, porque no solo reconoce el poder político para quienes quieran organizarse en los nuevos partidos y movimientos políticos, sino también se da oportunidad de tener nuevos tomadores de decisiones y Policy Makers que conocen a fondo el contexto de las zonas rurales donde muchas veces el Estado no ha intervenido, lo que ha contribuido a la consolidación del régimen pluralista mencionado en el primer capítulo del presente texto y consignado en la Constitución política del 91. Es importante resaltar que estas mismas zonas también serán tomadas en cuenta para la participación política incentivada por el acuerdo, empero, el desafío es la imagen y la organización que le den

los nuevos partidos y los movimientos políticos a la población, en especial, los opositores, quienes tienen la responsabilidad de manifestar el bien común y sin necesidad de generar temor.

Ahora bien, el análisis del panorama político con la firma de la paz entre gobierno y Farc requiere ahondar en aspectos que trabajan como garantes para una equidad mancomunada a lo largo de la firma. Es así como uno de los puntos centrales dentro del panorama político del posconflicto es el referente a la desmovilización. Como lo evidencia la revista *Semana* en su artículo acerca de este tema, definir la situación penal de impunidad es un parágrafo de vital importancia para el desarrollo de un análisis estructurado (*Semana*, 2014). Este quizás es de los puntos de mayor congruencia en el debate nacional, en lo que se refiere a la posible impunidad de los actores armados ilegales, lo cual acrecienta su importancia en el desarrollo de esta temática.

Por otra parte, autores, como Molano Rojas (2015), afirman que el posconflicto alberga una serie de retos que trascienden lo netamente social. El tema de la seguridad y las garantías políticas ante este escenario requieren un estudio detallado y una contextualización del panorama actual de la nación (Molano Rojas, 2015). Así mismo, Molano hace especial hincapié en el tema del manejo de la justicia en el posconflicto bajo parámetros objetivos y no sesgados a la conveniencia de esta temática.

Por último, es necesario ahondar acerca de la figura política que podrían adquirir aquellos actores armados desmovilizados tras el cese al fuego. El debate gira en torno a un análisis de números y curules, mas no a una posibilidad arbitraria (*El Tiempo*, 2015). Esto implica que el escenario político del posconflicto trasciende de un análisis gubernamental, para dar paso a uno donde se pueda poner a consideración a estos actores armados como líderes con voz y opinión dentro de la legislación nacional. Con lo anterior, además de la verificación de los puntos más trascendentales para el panorama social de la nación con el desarrollo de los acuerdos, se busca establecer bases suficientemente sólidas que garanticen la perpetuidad de la democracia como sistema político afianzado en una nación ad portas de un cambio sin comparación en toda su historia.

Análisis desde el enfoque

Las implicaciones políticas del posconflicto en Colombia son más que evidentes. Ante todo, cada uno de los puntos por desarrollar se seguirá bajo un enfoque estructuralista, donde se anteponga un funcionamiento lógico y estructurado del panorama nacional, sobre la posible firma de un cese al fuego por parte de actores armados ilegales, y que este gire en torno a la impunidad y la no posibilidad de concepción de retribuciones sociales, políticas y mucho menos democráticas.

Como primer punto por sustentar dentro de las implicaciones políticas del posconflicto en Colombia aparece la desmovilización. Como lo mencionara el diario *La Tarde*, “La paz dejaría 25 mil guerrilleros desmovilizados del Eln y Farc” (*La Tarde*, 2013). Tamañas cifras implicarían la necesidad de una consideración de reestructuración en muchas instancias a nivel político y social. El Gobierno se vería en la obligación de realizar cambios en procura de facilitar el proceso de desmovilización y reintegración a tantas personas en el ámbito nacional. Así mismo, la consideración de la institución de nuevos partidos políticos, que representen los intereses de quienes deseen apoyar las consignas de quienes pudiesen pertenecer a las Farc, se convertiría en una vía de hecho para garantizar el cumplimiento de la democracia dentro del sistema político colombiano.

En relación con lo anterior, la participación política de las Farc garantizaría la equidad y la igualdad que profesa en sus haberes conceptuales el término democracia. Dentro de los distintos análisis que pueden ser atribuidos al término de democracia, se debe destacar el de Dahl (2004); para este autor, la democracia significa el gobierno del pueblo. Mientras existan personas cuyos ideales se ajusten a un sistema político establecido por posibles nuevos partidos, entre estos los que puedan desarrollar los grupos armados como las Farc, se seguirá cumpliendo a cabalidad lo que implica contar con un sistema democrático en el territorio colombiano. Del mismo modo, además de indagar acerca de posibles nuevos partidos políticos participativos, es necesario ahondar acerca de las necesidades de los nuevos participantes dentro de esta democracia.

El diseño de nuevas políticas, el apoyo en términos de empleo y educación, seguridad, entre otras, vendrían a formar parte de una serie de cambios necesarios en lo normativo y lo administrativo, dados gracias a un enfoque político participativo que contemple la inclusión de las Farc en todos los niveles políticos y sociales del panorama nacional. Esto supondría ir en contra de un enfoque estructuralista, debido a que el orden actual de la sociedad se vería trasgredido y modificado a las circunstancias necesarias del posconflicto, restando esto importancia a la necesidad de una estructura social, puesto que en tal caso, significaría que podría ajustarse a cualquier necesidad. En otras palabras, la estructura política del panorama administrativo colombiano debería cambiar para garantizar el cumplimiento de una democracia absolutamente participativa e incluyente con el desarrollo del acuerdo de la paz en Colombia.

Por otra parte, el posconflicto en Colombia supondría la necesidad de desarrollo de una nueva estructura política que busque acomodarse al panorama actual de magno evento. Esto implicaría la necesidad de reformas políticas, económicas y jurídicas, tal y como lo menciona Álvarez (2015) en su columna de opinión en el diario *El Colombiano*. Álvarez menciona la posible necesidad de llevar a cabo una reforma orgánica y funcional en la que se tuviera en consideración la disminución de las fuerzas militares nacionales, ante la mitigación de los grupos armados ilegales, así como la consideración de nuevos estamentos que permitan la inclusión política participativa de este grupo en Colombia. Esto nuevamente ocasionaría que el país se sometiese a una reforma estructural en muchos sentidos para abrir el paso a posconflicto, deteriorando evidentemente el esquema organizativo manejado hasta la fecha, el cual sin ser eficiente, sustenta el cómo se ha forjado una nación a través de los años. Así mismo, dicha reforma implicaría contemplar la inclusión política para sostener las bases democráticas de la nación.

Con lo anterior no se busca sustentar una oposición al cese al fuego o un posible tratado para la paz, o la misma participación política de las Farc; en absoluto. Sin embargo, como ha sido tratado a partir de una serie de debates e información sustentada como la presentada por el diario *El Nuevo Siglo* (2013), el posconflicto vendría a traer una serie de medidas que más que impunidad permitirían beneficiarse en

toda regla a todos y cada uno de los actores al margen de la ley involucrados. El cese al fuego debería estar enmarcado por una visión clara y contundente de justicia para garantizar una participación política democrática; en cual los actores armados ilegales puedan responder a la sociedad de manera contundente y no efímera, si su deseo es hacer parte de los ideales políticos que promulgan los partidos en Colombia. Y es en ese caso, donde la política manejada en torno al conflicto, carece de convicción y visión clara para que se desarrolle la paz en torno a la justicia. Es a lo que hacen llamado los colombianos; a que la estructura política y normativa del país no se vea subyugada por un proceso de paz carente de lógica.

Con lo anterior solo se busca recalcar la importancia de cómo la construcción de partidos políticos, o la inclusión política de las Farc en el entorno nacional, implica una serie de debates y desafíos por parte de este mismo grupo y el Gobierno nacional, donde para dar crédito a la democracia, sea necesario solventar apartes fundamentales dentro de la concepción y posterior firma de la paz en el territorio nacional. Esto es, el simbolismo necesario para indicar cómo la democracia o la construcción de partidos políticos que luchen por los ideales de este grupo armado necesita enfáticamente solventar el daño causado a la nación a lo largo de los años.

Sin embargo, a pesar de toda la connotación histórica que el conflicto armado tiene en Colombia, es claro que la firma de la paz significa el dar un paso hacia adelante en la búsqueda de oportunidades para garantizar aún más la democracia en el país. Se respaldan los ideales de un grupo como las Farc mediante la participación política, lo que asegura aún más la equidad y la igualdad participativa política de todos los colombianos en todos los niveles.

Por último, y quizás más importante dentro del abordaje de la temática política en el escenario del posconflicto en Colombia, es la imagen política que podrán adquirir los representantes de los grupos armados tras la firma de la paz. Como lo sustenta Lemoine (2013) en su columna, antes de un escenario político que favorezca el desarme en los grupos ilegales, se debe hablar de justicia social. La impunidad no puede ser el centro del desarrollo de las negociaciones en la Habana. El primer punto dentro de la búsqueda de la paz en Colombia, debería

ser el saldo de cuentas de los actores armados ilegales para con la sociedad y sobre todo con el país. No se puede concebir un escenario utópico de desarme, sin tener claros puntos vitales acerca de una verdadera reparación social. Y para ello, la política colombiana debería estar centrada en ello, en la reparación social.

Infortunadamente, la política actual colombiana tiene una visión diezmada por un deseo de paz utópica que se conciba a través de los papeles y no de una realidad mancomunada de toda una sociedad. No debe ser posible alcanzar tan importante logro en el país a costa de la justicia. Las curules representativas políticas de la nación deben estar salvaguardadas para la diversidad de ideales y de opiniones, sin que esto conlleve la permisividad de la impunidad como eje tajante a su estructuración. Debe existir una sinergia y una coordinación entre el desarrollo de las políticas para el posconflicto, y la justicia. En ningún momento se puede perder el horizonte donde un conflicto de más de 50 años termine con la otorgación de cabildos políticos a quienes sembraron la guerra en el territorio nacional.

Con todo lo anterior, es innegable indicar cómo la firma de la paz ha de contribuir análogamente a la participación política y a la consolidación de la democracia en el país, gracias a la inclusión de nuevas formas o partidos políticos que promulguen los ideales de libertad profesados por las Farc. Sin embargo, el debate es aún más extenso si lo que se desea es analizar a costa de qué se busca dar sustento a la democracia y la participación política de las Farc con la firma entre este grupo y el Gobierno nacional.

Escenarios

Por medio de este escrito se trató de dar una visión general acerca de las implicaciones políticas en el tema del posconflicto en Colombia y, por supuesto, de cómo la inclusión de las Farc en el panorama político nacional garantizaría los estamentos democráticos que sustenta la nación colombiana. Se utilizaron aportes de diversos autores y opiniones, con el fin de reflejar una realidad de necesidad política en torno a este tema. Con todo lo analizado y desarrollado en el presente texto se logra entrever los siguientes escenarios en relación con la temática desarrollada:

El primer escenario en el posconflicto es uno en el que el cual la justicia salga garante y se cumplan el mínimo de las exigencias interpuestas por la sociedad en procura de un reparo a la nación y, con ello, un paso más cerca hacia una democracia clarificada para los colombianos. Es un camino en el que se logra la paz por medio del pago de las obligaciones sociales de todos los actores armados involucrados en el conflicto. En cuyo caso, el enfoque estructuralista sea consecuente con las políticas por desarrollar y la justicia siga los parámetros establecidos por la Constitución nacional. En este escenario, los actores armados lograrían alcanzar puestos políticos de consideración, siempre y cuando exista justicia de por medio que le garantice a toda la sociedad colombiana, una democracia inclusiva y participativa, sin que se ponga en tela de juicio la manera de alcanzar este objetivo.

El segundo escenario es uno donde la situación política del país en referencia al conflicto armado no sustente ninguna variación. Esto implicaría que tras el desarrollo de un acuerdo en la Habana entre los actores armados y el Gobierno nacional, sea la sociedad quien tenga la última palabra, y ante posibilidades abiertas como la impunidad y el beneficio a quienes actuaron en su momento en contra del interés nacional colombiano, se decida optar por la no aceptación de los puntos interpuestos para el desarrollo de la paz en el territorio. Este escenario no implicaría cambios a la situación actual del país, pero sí sentaría una voz de protesta por parte del pueblo colombiano hacia la impunidad y el deseo de una paz con ímpetus de justicia. Y más importante aún, sustentaría la negación de una democracia incluyente hacia todos los habitantes de esta nación, con lo cual, se estarían violando los preceptos que sustenta un enfoque democrático participativo en una nación como la colombiana.

El último escenario y el menos calificado en términos de un desarrollo estructural adecuado en torno a la justicia colombiana sería el de la impunidad y con ello, una el alcanzar una participación política democrática a costas de la historia colombiana. Donde se pase por encima de los derechos de la sociedad y el repudio en cuanto a las acciones llevadas a cabo por parte de los grupos armados ilegales y se les blinde ante la justicia, y aunado a ello, se les posibilite alcanzar curules de elección popular mediante un enfoque democrático

participativo. Este escenario carecería de un sentido lógico en cuanto al manejo de una estructura de justicia eficiente, en la cual la impunidad jamás ha sido el eje central de su desarrollo. Por el contrario, la justicia se esboza como un algo necesario en una sociedad como la colombiana y, por ende, este escenario si bien parece el más cercano, podría ser el que conduzca a un repudio nacional generalizado hacia el manejo político nacional.

Sea cual sea el escenario que se irga con el desarrollo de la paz en Colombia entre el Gobierno y las Farc, la búsqueda de la participación política de este grupo armado permitiría dar un paso más cerca hacia el cumplimiento de lo que muchos teóricos denominan como *democracia*; con esto se requiere un análisis más profundo, en el cual se detallen aspectos puntuales y generales dentro de la elaboración del documento y firma para la paz, en procura de velar por los intereses y desafíos de toda una nación, sin que se trate de opacar toda la historia de vicisitudes en el panorama político y democrático nacional.

Referencias

- Álvarez, L. F. (2015, feb.). *Reformas institucionales para el posconflicto*. *El Colombiano*. Recuperado el 2 de marzo de 2016, de <http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/reformas-institucionales-para-el-posconflicto-YC1271643>
- Angell, A. (1997). La izquierda en América Latina desde c. 1920. *Historia de América Latina*, 12, 73-131
- Azpuru, D., Blanco, L., Córdova Macías, R., Loya Marín, N., Ramos, C. G. y Zapata, A. (2007). *Construyendo la democracia en sociedades posconflicto: Guatemala y El Salvador, un enfoque comparado* (n.º E50-1080).
- Bailey, N. A. (1967). La violencia in Colombia. *Journal of Inter-American Studies*, 9 (4), 561-575. doi:10.2307/164860
- Bleier, E. U. y Arévalo, C. A. (2004). Partidos y sistema de partidos en Colombia hoy: ¿crisis o reordenación institucional? *Partidos políticos en la Región Andina: entre la crisis y el cambio*, 51.
- Caicedo, M. B. (2014). Farc INC. *Las 2 Orillas*.
- Constitución política de Colombia Modelo de cita: [Const.] (1991) (2ª edición). Legis.

- Dahl, R. (2004, dic.). *La Democracia*. Recuperado el 6 de septiembre de 2016, de <http://sociologiapolitica.sociales.uba.ar/files/2013/09/Dahl-POstdata.pdf>
- DEA (2015). *2015 National Drug Threat Assessment Summary*. Washington: U.S Department of Justice.
- El Nuevo Siglo* (2013, jul.). Posconflicto: “las heridas se cierran acabando la impunidad”. Recuperado el 2 de marzo de 2016, de <http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/7-2013-posconflicto-%E2%80%99Clas-heridas-se-cierran-acabando-la-impunidad%E2%80%99D.html>
- El Tiempo* (2015, nov.). *Debate por curules directas en el Congreso para Farc*. Recuperado el 2 de marzo de 2016, de <http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-debate-por-curules-directas-en-el-congreso-para-farc/16425124>
- El Imparcial*. (2010, mar.). Un ex guerrillero zapatista revela la relación entre el EZLN y ETA. *El Imparcial*.
- García, G. N. P. (2009). Las Farc, su origen y evolución/Farc, origins and evolution. *UNISCI Discussion Papers*, 19, 154-184.
- González Arana, R. y Trejos, L. F. (2013). El Partido Comunista Colombiano y la combinación de todas las formas de lucha. Entre la simpatía internacional y las tensiones locales, 1961- 1981. *Revista Izquierdas*, Número 17. 64-80. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360133459003>
- Hookham, M. (1967). Reflections on the russian revolution. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, 43 (4), 643-654. doi:10.2307/2612802
- Konrad Adenauer Stiftung (2013). *Hacia el posconflicto en Colombia*. Recuperado el 2 de marzo de 2016, de <http://www.kas.de/kolumbien/es/publications/36392/>
- Lemoine, M. (9 de Febrero de 2013). *Colombia, “sin justicia social, no hay paz”*. Recuperado el 02 de Marzo de 2016, de <http://www.eldiplo.info/portal/index.php/component/k2/item/307-colombia-%E2%80%99Csin-justicia-social-no-hay-paz%E2%80%99D>
- Lenin, V. I. (1906). La guerra de guerrillas. *Proletari*, 5.
- McDermott, J. (2013, mayo). Actividades criminales de las FARC y las ganancias de la guerrilla. En *Insight Crime*. Recuperado el 5 de septiembre de 2016, de <http://es.insightcrime.org/investigaciones/actividades-criminales-farc-y-ganancias-de-la-guerrilla>

- Molano Rojas, A. (2015). *El posconflicto en Colombia: reflexiones y propuestas para recorrer la transición*. Recuperado el 2 de marzo de 2016, de <http://www.kas.de/wf/doc/16133-1442-4-30.pdf>
- Monroy Cabra, M. G. (2011). La democracia representativa y participativa. En R. Araújo Oñate, y M. L. Torres Villareal, *Retos de la democracia y de la participación ciudadana* (pp. 3-26). Bogotá, D.C.: Editorial Universidad del Rosario.
- Payne, M. (2006). Sistemas de partidos y gobernabilidad democrática. En M. Payne, D. Zovatto y M. Mateo, *La política sí importa* (pp. 165-197). Washington, D.C: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Periódico La Tarde* (2013, dic.). *La paz dejaría 25 mil guerrilleros desmovilizados del Eln y Farc*. Recuperado el 2 de marzo de 2016, de <http://www.latarde.com/actualidad/colombia/126186-la-paz-dejaria-25-mil-guerrilleros-desmovilizados-del-eln-y-farc>
- Peña Contreras, S. L. (2007). Sistema político y democracia en Colombia. Redes de inclusión en los años sesenta y noventa, una aproximación desde la teoría de los sistemas. *Diálogos de saberes*, 191-230.
- Revista Semana*. (2014, dic.). ¿Qué le espera al post-conflicto colombiano? Recuperado el 2 de marzo de 2016, de <http://www.semana.com/noticias/articulo/que-espera-post-conflicto-colombiano/69797-3>
- Roll, D. (2002). El sistema político y el sistema de partidos en Colombia. En D. Roll, *Rojo difuso y azul pálido. Los partidos tradicionales en Colombia. Entre el debilitamiento y la persistencia* (pp. 109-123). Bogotá, D.C.: Universidad Nacional de Colombia.
- Sierra, J. R. (2016). La narcotización del activismo guerrillero de las Farc Y el Eln 1998-2012/título en inglés: “The narcotisation of FARC and ELN guerilla activities, 1998-2012”. UNISCI Journal, N° 41
- UNISCI Discussion Papers*, (41), 205-233. doi:http://dx.doi.org/10.5209/rev_RUNI.2016.n41.52680
- Wickham-Crowley, T. (1987). The rise (and sometimes fall) of guerrilla governments in latin america. *Sociological Forum*, 2 (3), 473-499.